



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

Administración Penitenciaria y reinserción social

Autor/es

MARINA PERRELLA GARCÍA

Director/es

SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ

Facultad

Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja

Titulación

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía

Departamento

DERECHO

Curso académico

2016-17



Administración Penitenciaria y reinserción social, de MARINA PERRELLA
GARCÍA

(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright.



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

**ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA Y
REINSERCIÓN SOCIAL**

MARINA PERRELLA GARCÍA

Tutor: Sergio Pérez González

MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA

Año Académico 2016-2017

RESUMEN

Este trabajo trata de dar una visión general de los aspectos más importantes del Derecho Penitenciario en relación con el mandato constitucional de resocialización. Para ello se realiza un análisis de la normativa que resulta aplicable, relacionando así los aspectos esenciales de la Administración Penitenciaria con la reinserción social de los reclusos.

En el presente trabajo se abordarán, entre otras cosas, cuestiones relativas a la ejecución de la pena y concesión de beneficios penitenciarios, a los distintos tipos de regímenes y grados penitenciarios y a las alternativas a prisión que existen en nuestra legislación; todas ellas pondrán de manifiesto la dificultad que existe *de facto* para lograr la reinserción social de aquellos que han sido condenados a una pena de prisión.

Palabras clave: Derecho Penitenciario, Administración Penitenciaria, reinserción social, alternativas a prisión.

ABSTRACT

This work tries to give an overview of the most important aspects of Penitentiary Law in relation to the constitutional mandate of resocialization. For that, we made an analysis of the applicable law, thus relating the essential aspects of the Prison Administration to the social reintegration of inmates.

In this work we approach, among others, issues related to the execution of sentences and the granting of prison privileges, to the different types of prison regimes and grades, and to alternatives to prison that exist in our legislation; all of them will reveal the difficulty that exists *in fact* to achieve the social reintegration of those who have been sentenced to a prison term.

Keywords: Penitentiary Law, Prison Administration, social reintegration, alternatives to prison.

ABREVIATURAS

art.	artículo
CE	Constitución Española
<i>Cfr.</i>	Confróntese
<i>cit.</i>	citado
CP	Código Penal
LOGP	Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria
Nº	número
pág.	página
págs.	páginas
RP	Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario
RSP	Decreto de 2 de febrero de 1956 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prisiones.
SSTC	Sentencias del Tribunal Constitucional
TBC	Trabajo en beneficio de la comunidad
TC	Tribunal Constitucional
<i>Vid.</i>	Véase

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1. CONCEPTO Y NORMATIVA APLICABLE.....	3
1.1. Concepto de Derecho Penitenciario.....	3
1.2. Normativa aplicable.....	4
2. EJECUCIÓN DE LA PENA	10
2.1. Cuestiones generales.....	10
2.2. Beneficios penitenciarios.....	11
2.2.1. Redención de penas por el trabajo	12
2.2.2. Adelantamiento de la libertad condicional	13
2.2.3. Indulto particular	16
3. RÉGIMENES PENITENCIARIOS	18
3.1. Tipos de regímenes penitenciarios	18
3.2. Tratamiento penitenciario y clasificación por grados.....	20
3.3. Formación y trabajo penitenciario	23
4. ALTERNATIVAS AL INGRESO EN PRISIÓN.....	27
4.1. Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.....	27
4.2. Trabajo en beneficio de la comunidad.....	29
4.3. Alternativas en función de la peligrosidad del sujeto: medidas de seguridad	32
4.4. Situación europea en materia de alternativas a prisión.....	35
5. PERSPECTIVA APLICADA DE LA FUNCIÓN RESOCIALIZADORA DE LA PENA.....	38
CONCLUSIONES.....	47
BIBLIOGRAFÍA	49

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es mostrar y valorar la relación entre la Administración Penitenciaria y la reinserción social de los reclusos. El motivo de la elección del tema de este trabajo es que el Derecho Penitenciario constituye una rama del Derecho que afecta a muchos colectivos y que, a pesar de que no interese especialmente que sea conocido, juega un papel crucial en la posterior resocialización de los mismos.

Es un tema del que normalmente no suele hablarse en contextos sociales normales porque, como se verá a lo largo del trabajo, por lo general la prisión causa rechazo. Además, el Derecho Penitenciario no es una rama del Derecho que haya sido especialmente tratada por la doctrina penalista, por lo que resulta interesante profundizar un poco más en él y descubrir sus entresijos.

Así, será necesario analizar tanto el concepto de Derecho Penitenciario como la normativa que lo compone, que no es poca, ya que además de las normas propias que regulan el Derecho Penitenciario también es necesario mencionar normas de otras ramas del Derecho para completar la normativa aplicable en este asunto. En este caso, dado que interesa profundizar en la dimensión resocializadora, el presente trabajo se centrará en los preceptos que más enfocados están hacia la consecución de la reinserción social de los reclusos, de forma que finalmente se pueda tener una visión global de la relación que existe entre la Administración Penitenciaria y la resocialización de los internos.

Para estudiar el objeto del presente trabajo, el mismo se divide en cinco capítulos principales en los que se tratará de abordar los aspectos más importantes sobre la Administración Penitenciaria y la reinserción social de los reclusos. En el primero de ellos se abordarán tanto los aspectos relativos al concepto en sí mismo de Derecho Penitenciario como la normativa que le es aplicable.

En el segundo capítulo se tratará la ejecución de la pena, desde las características de la pena y sus formas de ejecución hasta los beneficios penitenciarios que pueden obtener los reclusos una vez estén cumpliendo condena dentro de un centro penitenciario.

La tercera parte se centra en analizar tanto los distintos tipos de regímenes penitenciarios –ordinario, abierto y cerrado– como la forma de clasificación de los internos en grados a través del sistema de individualización científica, e incluso el tratamiento que reciben según sus características personales y su clasificación.

El cuarto capítulo del presente trabajo está dedicado a las alternativas a prisión. Quizá sea uno de los capítulos más importantes de este estudio, ya que es interesante barajar las alternativas que existen a la prisión y que favorecen la inclusión social de aquellos que han sido condenados a una pena privativa de libertad.

En quinto lugar, el último capítulo tratará de mostrar de una forma subjetiva y más práctica la realidad de la reinserción social en nuestro país; es decir, cuáles son los métodos que utiliza la Administración Penitenciaria para procurar a los internos una vida en libertad digna, si efectivamente esos métodos dan los resultados esperados, cuál es la percepción que tiene la sociedad de quienes han cumplido condena en prisión, estadísticas de reinserción, etc.

Finalmente, el presente trabajo terminará con unas conclusiones extraídas del análisis realizado de cada uno de los apartados mencionados y que concluirá con una valoración general del papel que tiene actualmente la reinserción de los reclusos en nuestra sociedad.

1. CONCEPTO Y NORMATIVA APLICABLE

1.1. Concepto de Derecho Penitenciario

El Derecho Penitenciario puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y las medidas penales privativas de libertad¹, con la finalidad de conseguir la reeducación y la reinserción social de los condenados por sentencia firme, así como de la relación jurídica que surge como consecuencia del internamiento de los presos². De forma similar define esta rama del ordenamiento jurídico CERVELLÓ DONDERIS afirmando que se trata del “conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de todas las sanciones penales privativas de libertad, sean penas o medidas de seguridad”³.

A pesar de que el Derecho Penitenciario tiene una relación muy estrecha con el Derecho Penal –ya que se ocupa de la ejecución de las penas privativas de libertad– y con el Derecho Administrativo –por la relación que regula entre los internos y la Administración–, poco a poco su independencia ha ido abriéndose camino hasta poder afirmar que es completamente autónomo respecto de cualquier otra rama jurídica. Las razones fundamentales que sostienen esta independencia de la que goza el Derecho Penitenciario son las siguientes⁴:

- En primer lugar, existe un cuerpo legal independiente que regula las relaciones jurídicas penitenciarias, distinto de las normas que regulan los delitos y las penas y de las normas que establecen el procedimiento a seguir.

¹ JUANATEY DORADO, C., *Manual de derecho penitenciario*, Iustel, Madrid, 2011, pág. 25.

² Por mandato del art. 25.2 CE, en el que se establece que tanto las penas como las medidas de seguridad deben estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social de los condenados.

³ CERVELLÓ DONDERIS, V., *Derecho Penitenciario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 75.

⁴ CERVELLÓ DONDERIS, V., *Derecho Penitenciario*, cit. págs. 78 y ss.

- En segundo lugar, la materia que regula dicho cuerpo legal independiente es la relación jurídica de los internos con la Administración Penitenciaria, así como los derechos y deberes que deben prevalecer o extinguirse durante el internamiento, que difiere totalmente de cualquier otra materia.
- Por último, el Derecho Penitenciario cuenta con una jurisdicción propia, atribuyéndose a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria velar por el cumplimiento de las normas y por el bienestar de los internos.

1.2. Normativa aplicable

Una vez hecha la anterior aproximación al concepto de Derecho Penitenciario así como a su contenido, es necesario profundizar en la normativa que lo compone.

El punto de partida de este análisis no puede ser otro que la Constitución Española, que sienta los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, también los que rigen la Administración Penitenciaria. En concreto, es en el art. 25.2 del mencionado cuerpo legal donde se hace referencia al objeto mismo de este trabajo, que no es otro que exponer el funcionamiento de la Administración Penitenciaria en relación con la reinserción a la que se refiere nuestra norma suprema. Dicho artículo reza de la siguiente forma:

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los Derechos Fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

Es preciso afirmar, por tanto, que nuestra Constitución otorga los mismos derechos y obligaciones a quienes han sido condenados a una pena privativa de libertad y a quienes no lo han sido, exceptuando aquellos derechos que el

tribunal sentenciador haya decidido limitar⁵. De esta igualdad de derechos y obligaciones deriva también el mandato constitucional que orienta las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad hacia la reeducación y la reinserción, pues la finalidad de la pena no es únicamente aislar del resto de la sociedad a quienes han cometido un delito, sino castigar su comportamiento mediante una reclusión que favorezca su inclusión en la sociedad una vez hayan cumplido su correspondiente condena.

Así, podemos diferenciar varias finalidades de la pena⁶:

- La primera de ellas es la retributiva, que se limita a castigar determinados comportamientos que han sido recogidos en nuestro Código Penal como delitos.
- La segunda de ellas consiste en la prevención del delito, que tiene dos vertientes:
 - o La prevención general: consiste en intimidar a la sociedad mediante la amenaza de que un determinado comportamiento conllevará su correspondiente condena.
 - o La prevención especial: consiste en intentar que aquellos que ya han cometido un delito no vuelvan a cometerlo, es decir, en la reeducación y corrección de su comportamiento para una futura reinserción social.

Es esta última de las finalidades de la pena a la que hace referencia el art. 25.2 CE: la finalidad preventiva especial. Como no podía ser de otra forma, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en numerosas ocasiones⁷ sobre el sentido que tiene recoger en nuestra Constitución la reeducación y la reinserción social como fin de las penas privativas de libertad.

⁵ FERNÁNDEZ APARICIO, J.M., *Derecho Penitenciario. Comentarios Prácticos*, Sepin Editorial Jurídica, Madrid, 2007, pág. 18.

⁶ DELGADO DEL RINCÓN, L.E., "El artículo 25.2 CE: algunas consideraciones interpretativas sobre la reeducación y la reinserción social como fin de las penas privativas de libertad", *Revista jurídica de Castilla y León. Número extraordinario*, enero 2004, págs. 349 y ss.

⁷ Vid. SSTC 19/1988, de 16 de febrero y 209/1993, de 28 de junio, entre otras.

Según apunta el TC en sus resoluciones, el mandato constitucional recogido en el artículo 25.2 CE no limita las finalidades de la pena a la reeducación y la reinserción, sino que pueden aplicarse penas que se ajusten, por ejemplo, a su finalidad retributiva sin que éstas sean inconstitucionales. Esto encuentra su motivación en la diferencia que existe entre unas penas y otras; como ejemplo, la finalidad de una pena de corta duración no puede ser la misma que la de otra cuya duración se dilate en el tiempo, aunque sí es cierto que el mandato constitucional al que nos referimos continuamente debe estar siempre presente –sin olvidar otros posibles fines de la pena–⁸.

Concretamente, el TC se pronunció sobre este asunto en su Sentencia 19/1988, de 16 de febrero, manifestando que “no se sigue ni que tales fines reeducadores y resocializadores sean los únicos objetivos admisibles de la privación penal de la libertad ni, por lo mismo, que se ha de considerar contraria a la Constitución la aplicación de una pena que pudiera no responder exclusivamente a dicho punto de vista”. Así mismo, continúa en la misma resolución de la siguiente forma: “puede aceptarse de principio que las penas cortas privativas de libertad –y las medidas a ellas asimiladas por la ley, como ésta que consideramos– se prestan con dificultad mayor a la consecución de los fines aquí designados por la Constitución, pero, con independencia de que la posible frustración de tal finalidad habría de apreciarse atendiendo tanto a la duración de cada medida concreta como a su modo de cumplimiento, esta sola posibilidad no puede llevar a la invalidación del enunciado legal. La reeducación y la resocialización –que no descartan, como hemos dicho, otros fines válidos de la norma punitiva– han de orientar el modo de cumplimiento de las privaciones penales de libertad en la medida en que éstas se presten, principalmente por su duración, a la consecución de aquellos objetivos”.

Por lo tanto, el mandato constitucional recogido en el art. 25.2 CE se limita a orientar la política que debe seguir el legislador y la Administración Penitenciaria en relación con la finalidad de las penas, sin que consista en un

⁸ DELGADO DEL RINCÓN, L.E., “El artículo 25.2 CE: algunas consideraciones interpretativas sobre la reeducación y la reinserción social...”, *cit.*, pág. 348.

Derecho Fundamental para los reclusos, ya que las penas pueden tener también otros fines⁹.

A pesar de que la resocialización no es un Derecho Fundamental, los reclusos mantienen intactos otros derechos, por lo que es necesario traer a colación determinada normativa en relación con los mismos. Así, habrá que tener presente tanto la Carta de Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nos encontramos ante dos normas cuya finalidad no es otra que la de garantizar el respeto de los Derechos Fundamentales en todos los ámbitos de la vida de los individuos, incluyendo por tanto la vida como reclusos. Por ello, la normativa penitenciaria debe interpretarse de conformidad con dichos textos legales, respetando así los Derechos Fundamentales de los presos¹⁰ –aunque en este caso se debe excluir, por razones obvias, el Derecho Fundamental a la libertad consagrado en el art. 17 CE–.

Dejando de lado este pequeño apunte –aunque es imprescindible tenerlo siempre en cuenta–, las normas que van a regular de forma directa los establecimientos penitenciarios y la vida en prisión son las que a continuación se exponen.

En primer lugar, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Se divide en seis títulos que contienen un total de ochenta artículos, además de dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. Ya en su preámbulo se expone cuál es la finalidad de esta Ley:

“Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados.

Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados”.

⁹ Cfr. DELGADO DEL RINCÓN, L.E., “El artículo 25.2 CE: algunas consideraciones interpretativas sobre la reeducación y la reinserción social...”, *cit.*, págs. 350 y ss.

¹⁰ CERVELLÓ DONDERIS, V., *Derecho Penitenciario*, *cit.*, pág. 85.

Partiendo de esta premisa que, como ya hemos visto, también es un mandato constitucional, su estructura abarca la regulación tanto de los establecimientos y regímenes penitenciarios como del tratamiento y la asistencia pospenitenciaria, pasando también por el Juez de Vigilancia y los funcionarios que trabajan en prisión.

En segundo lugar, el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Se estructura en doce títulos, trescientos veinticinco artículos, cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias, una disposición derogatoria y una final, que tienen como finalidad el desarrollo y la ejecución de la LOGP. Dicho Real Decreto se aprueba con motivo de la necesidad que existía de reformar el Reglamento Penitenciario anterior, que databa de 1981. Los motivos de la reforma se centran en el incremento de la población reclusa, lo que hace que los centros penitenciarios deban modificar su gestión y sus instalaciones, en la aparición de nuevas patologías, nuevas formas de contratación –en relación con la función pública–, avances tecnológicos y médicos para el tratamiento de los reclusos e incluso se tiene en cuenta la línea jurisprudencial seguida por los tribunales respecto de la LOGP, entre otros aspectos¹¹. Así mismo, y siendo quizá lo que más interesa para este estudio, se realizan modificaciones en la ejecución del tratamiento “para que la Administración Penitenciaria pueda mejorar el cumplimiento de la misión de preparación de los reclusos para la vida en libertad que tiene encomendada, cuya consecución exige ampliar la oferta de actividades y de programas específicos para los reclusos, potenciando las prestaciones dirigidas a paliar, en lo posible, las carencias y problemas que presentan los internos y, en definitiva, evitando que la estancia de los internos en los centros penitenciarios constituya un tiempo ocioso y perdido”¹².

El mismo mandato constitucional del que se viene hablando a lo largo de este primer capítulo, se repite también en el articulado del Reglamento Penitenciario, quedando reflejado de la siguiente forma en su art. 2:

¹¹ Preámbulo del Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

¹² Preámbulo del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, I, tercer párrafo.

“La actividad penitenciaria tiene como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de los detenidos, presos y penados y la asistencia social de los internos, liberados y de sus familiares”.

Por último, es obligado mencionar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Sin ella no existirían las penas y, por lo tanto, tampoco existiría el Derecho Penitenciario.

En definitiva, la normativa que se utilizará habitualmente durante este estudio será la Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, por ser éstas las disposiciones que recogen la regulación directa de la Administración Penitenciaria. A pesar de esto, es imprescindible tener siempre en cuenta el mandato constitucional al que nos referíamos en un principio, ya que es el que orienta las políticas penitenciarias y, por lo tanto, también es el que orienta las dos normas citadas unas líneas más arriba. Ahora bien, no hay que olvidar que la reeducación y la reinserción social de los reclusos no es un Derecho Fundamental del que éstos gocen, sino que las penas privativas de libertad pueden tener otros fines sin obviar nunca el ya descrito por nuestra Constitución.

2. EJECUCIÓN DE LA PENA

2.1. Cuestiones generales

La ejecución penal es un género de ejecución de sentencias que consiste en hacer que se cumplan los pronunciamientos contenidos en las mismas. Dentro de este género podemos encontrarnos con la ejecución de penas y de medidas de seguridad, de consecuencias civiles y de consecuencias accesorias¹³.

Será en la ejecución de penas y de medidas de seguridad en la que nos centremos en este momento. Ésta consiste en la privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al culpable de una infracción penal. La pena en España tiene unos caracteres concretos que son los siguientes¹⁴:

- Predeterminación legal
- Jurisdiccionalidad
- Sujeción al principio de culpabilidad
- Personalidad
- Exclusión en nuestro sistema penal de la pena de muerte y de las penas corporales.

A la hora de ejecutar la pena privativa de libertad, quedará en manos del tribunal sentenciador si corresponde suspender o sustituir la pena fijada por otra de acuerdo con lo establecido en las leyes. Se trata de medidas que se han implementado en nuestro país debido al fracaso de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad, que ha llevado a contemplar estas vías alternativas de las que se hablará más adelante.

¹³ FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., NISTAL BURÓN, J., *Derecho Penitenciario*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, pág. 116.

¹⁴ FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., NISTAL BURÓN, J., *Derecho Penitenciario*, cit., pág. 116, donde se hace referencia a CUELLO CALÓN.

2.2. Beneficios penitenciarios

El concepto jurídico de beneficio penitenciario alude a las medidas dentro del marco de la Administración Penitenciaria que, con el fin de facilitar la reeducación y la reinserción social del recluso, permiten la reducción de su condena¹⁵.

Se hace referencia a ellos en la LOGP, concretamente en sus arts. 29 y 27. Aunque existe esta referencia, la LOGP no se encarga de su concreta regulación, sino que únicamente se limita a mencionarlos. Para tener un conocimiento más amplio de los beneficios penitenciarios es necesario acudir al Reglamento Penitenciario, en el que se dedica el Título VIII a éstos y a la libertad condicional¹⁶.

La finalidad de los beneficios penitenciarios viene descrita en el art. 203 RP y es la siguiente:

“Los beneficios penitenciarios responden a las exigencias de la individualización de la pena en atención a la concurrencia de factores positivos en la evolución del interno, encaminados a conseguir su reeducación y reinserción social como fin principal de la pena privativa de libertad”.

De este precepto se deduce que los beneficios penitenciarios responden al mandato constitucional de reeducación y reinserción social; se otorgan cuando el interno ha alcanzado ciertos logros que dejan vislumbrar su reeducación y, por lo tanto, se considera necesario otorgarle ciertos beneficios para que pueda conseguir reinsertarse en la sociedad, ya que de otra forma su internamiento en prisión sería un obstáculo para ello¹⁷.

¹⁵ Art. 202.1 RP. En el apartado 2º del mismo artículo se determina que constituirán, por tanto, beneficios penitenciarios, el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular.

¹⁶ Se hará una especial referencia a la libertad condicional en el apartado 2.2.2. de este mismo capítulo, en el que se habla del adelantamiento de la misma como una clase de beneficio penitenciario.

¹⁷ FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., NISTAL BURÓN, J., *Derecho Penitenciario*, cit., pág. 192.

Para conseguir estos beneficios penitenciarios es necesario reunir determinados requisitos. Así lo preceptúa el art. 204 RP, en el que se expone que para la propuesta de los beneficios penitenciarios será necesario ponderar razonadamente los factores que la motivan, así como acreditar la concurrencia de buena conducta, el trabajo, la participación del interesado en las actividades de reeducación y reinserción social y la evolución positiva en el proceso de reinserción. Esta última parte, en la que se menciona el proceso de reinserción del interno, conecta directamente con el tratamiento del que más adelante se hablará¹⁸.

2.2.1. Redención de penas por el trabajo

La redención de penas por el trabajo consiste en la reducción del tiempo de internamiento siempre que el recluso haya reunido determinados requisitos que exige para ello la ley –que consistirán principalmente en la realización de una actividad laboral o asimilada, como su propio nombre indica–. Se encontraba regulada en el art. 100 del Código Penal de 1973 y en los arts. 65 a 73 del Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, declarados vigentes por la disposición transitoria primera del actual Reglamento Penitenciario¹⁹; por lo tanto, a pesar de que estas normas hayan sido derogadas, la redención de penas por el trabajo podrá ser de aplicación para quienes hayan sido condenados por el Código Penal de 1973.

Los requisitos que se deben reunir son los siguientes: estar cumpliendo una pena de reclusión, presidio y prisión, y estar realizando una actividad laboral dentro del establecimiento penitenciario (art. 100 CP de 1973). Además, por supuesto, el recluso debe haber sido condenado durante la vigencia del Código

¹⁸ MANZANARES SAMANIEGO, J.L., *Suspensión, sustitución y ejecución de las penas privativas de libertad*, Editorial Comares, Granada, 2008, pág. 231.

¹⁹ Dicha disposición transitoria preceptúa lo siguiente: “Continuarán aplicándose después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento Penitenciario que se aprueba por este Real Decreto los artículos 65 a 73 del Reglamento de los Servicios de Prisiones, aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956, y las disposiciones complementarias dictadas hasta dicha fecha por la Administración penitenciaria correspondiente en materia de redención de penas por el trabajo (...)”.

Penal de 1973, ya que en la actual Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ya no se contempla esta posibilidad como beneficio penitenciario.

En cuanto a las modalidades de redención, teniendo en cuenta tanto el art. 100 CP de 1973 como el art. 73 del Reglamento de los Servicios de Prisiones, se pueden diferenciar tres²⁰:

- Redención ordinaria: consiste en abonar para el cumplimiento de la pena un día por cada dos de trabajo, computándose también el tiempo redimido para la concesión de la libertad condicional.
- Redención extraordinaria común: se encontraba regulada en el art. 71 RSP y consistía en realizar actividades de forma voluntaria de forma que finalmente su máximo aplicable era un día por cada dos de trabajo y ciento setenta y cinco días por cada año de cumplimiento de pena.
- Redención extraordinaria especial: consiste en labores de voluntariado como donar sangre, esfuerzos físicos o riesgos sufridos por auxiliar a autoridades de un centro penitenciario, repitiéndose en este caso el límite temporal de la redención extraordinaria común.

2.2.2. Adelantamiento de la libertad condicional

En primer lugar es necesario definir y enmarcar normativamente hablando la libertad condicional. Se encuentra regulada actualmente en los arts. 90 y ss. del Código Penal vigente. Como su propio nombre indica, consiste en suspender la pena de prisión por la libertad del recluso como forma de modular el paso de la prisión a la libertad, siendo ésta el mayor beneficio penitenciario que puede obtener de la legislación penitenciaria un recluso²¹. Tal y como se establece en el art. 90.1 CP, tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la libertad condicional se contempla como una modalidad de

²⁰ FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., NISTAL BURÓN, J., *Derecho Penitenciario*, cit., pág. 197.

²¹ FERNÁNDEZ APARICIO, J.M., *Derecho Penitenciario. Comentarios Prácticos*, cit., pág. 80.

suspensión de la ejecución cuya concesión queda supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Que el interno se encuentre clasificado en tercer grado.
- Que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta.
- Que se haya observado buena conducta.
- Que el juez de vigilancia penitenciaria haya valorado la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.
- Que se haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por los apartados 5 y 6 del artículo 72 LOGP.

Así mismo, la concesión de la libertad condicional conlleva determinadas obligaciones por parte del recluso que consisten principalmente en no delinquir durante la duración de la misma –hecho que pone de manifiesto también si el reo está preparado para la reinserción social– y en permitir que se le impongan determinadas prohibiciones relacionadas con su posible actividad delictiva²².

Una vez hecha esta breve descripción de la libertad condicional, lo que nos ocupa en este apartado es hacer referencia al adelantamiento de la misma como una modalidad de beneficio penitenciario. Su regulación se encuentra en el apartado 2 del art. 90 CP²³, que determina lo siguiente:

“También podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que cumplan los siguientes requisitos:

²² FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., NISTAL BURÓN, J., *Derecho Penitenciario*, cit., pág. 199.

²³ Aunque también se hace alusión al adelantamiento de la libertad condicional en el art. 205 RP, en el que se reproducen los requisitos contenidos en el Código Penal.

- a) Que hayan extinguido dos terceras partes de su condena.
- b) Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquéllas de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa.
- c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena”.

Como se puede observar, esta modalidad de libertad condicional solo dista del primer supuesto en el tiempo que debe computarse para su aplicación; es decir, en este caso el recluso deberá haber cumplido dos tercios de su condena quedando intactos el resto de requisitos. Este adelantamiento de la libertad condicional supone, por tanto, un beneficio penitenciario para los internos ya que se exige haber cumplido un tiempo de condena menor que en el primer caso.

En el apartado 3 del art. 90 CP encontramos una modalidad excepcional de libertad condicional por la que:

“El juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados en que concurran los siguientes requisitos:

- a) Que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y que ésta no supere los tres años de duración.
- b) Que hayan extinguido la mitad de su condena.
- c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere al apartado 1, salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena, así como el regulado en la letra b) del apartado anterior”.

También encontramos supuestos especiales de libertad condicional en el art. 91 CP. La norma se refiere a reclusos que hayan superado la edad de

setenta años o sufran enfermedades muy graves con padecimientos incurables, en cuyo caso no será necesario observar el requisito de temporalidad para poder conceder la libertad condicional.

Por último, es necesario mencionar que la concesión de la libertad condicional para personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o grupos terroristas “requiere que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado (...)” (art. 90.8 CP). En estos casos no podrá aplicarse el adelantamiento de la libertad condicional.

2.2.3. Indulto particular

El indulto es una medida de gracia por la que directamente se otorga la libertad al recluso, quien verá interrumpida la ejecución de su pena privativa de libertad. Así, el art. 130.1 CP contempla el indulto en su apartado cuarto como una de las formas que extingue la responsabilidad criminal. El indulto particular se encuentra regulado en el Reglamento Penitenciario como una modalidad de beneficio penitenciario junto al adelantamiento de la libertad condicional (art. 202.2 RP).

De forma más concreta, es el art. 206 RP el que se encarga de establecer los requisitos para su concesión:

“La Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico, podrá solicitar del Juez de Vigilancia Penitenciaria la tramitación de un indulto particular, en la cuantía que aconsejen las circunstancias, para los penados en los que concurran, de modo continuado durante un tiempo mínimo de dos años y en un grado que se pueda calificar de extraordinario, todas y cada una de las siguientes circunstancias:

a) Buena conducta.

b) Desempeño de una actividad laboral normal, bien en el Establecimiento o en el exterior, que se pueda considerar útil para su preparación para la vida en libertad.

c) Participación en las actividades de reeducación y reinserción social”.

Con base en lo expuesto en este artículo, es obligado mencionar que la concesión del indulto no queda en manos de la Administración Penitenciaria, sino que el ejercicio de este derecho de gracia corresponde al Rey (art. 62. i) CE), pero *de facto* la tramitación del expediente de indulto quedará en manos del Ministro de Justicia, que será quien finalmente lo conceda o deniegue²⁴. Estas formalidades proceden del articulado de la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio del derecho de la gracia de indulto que, en su brevedad, se encarga de regular esta figura. De esta ley se desprende que existen dos tipos de indulto (art. 4º):

- En primer lugar, el indulto total, que consiste en la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado el recluso y que todavía no hubiese cumplido.
- En segundo lugar, el indulto parcial, que consiste en la remisión de alguna de las penas impuestas o parte de todas en las que hubiese incurrido, así como la conmutación de las penas por otras menos graves.

Regulado de esta forma, el indulto particular se convierte en la tercera modalidad de beneficio penitenciario vigente en nuestro ordenamiento jurídico.

²⁴ FERNÁNDEZ APARICIO, J.M., *Derecho Penitenciario. Comentarios Prácticos*, cit., pág. 180.

3. RÉGIMENES PENITENCIARIOS

3.1. Tipos de regímenes penitenciarios

Los regímenes penitenciarios encuentran su regulación en los arts. 15 y ss. LOGP y en los arts. 73 y ss. RP. Teniendo en cuenta este articulado pueden distinguirse los aspectos que a continuación se expondrán.

En cuanto a su definición, se entiende por régimen penitenciario “el conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos” (art. 73.1 RP). De forma similar lo definen FERNÁNDEZ ARÉVALO y NISTAL BURÓN²⁵:

“El hecho de que los Establecimientos Penitenciarios alberguen, en un espacio limitado, y de manera forzada, a un colectivo de personas muy diferentes, con problemas de adaptación a las pautas de comportamiento en el medio social, exige una organización que evite los problemas de convivencia que puedan surgir (violencia, motines...). Esta organización de la que forman parte normas, reglas y restricciones, recibe el nombre de régimen penitenciario”.

En el momento de producirse el primer ingreso, a cada interno se le abrirá un expediente personal, en el que constará toda la información relativa a su situación procesal y penitenciaria (art. 15.2 LOGP). Una vez hecho esto, “se procederá, de manera inmediata, a una completa separación, teniendo en cuenta sexo, emotividad, edad, antecedentes, estado físico y mental y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento” (art. 16 LOGP).

En lo que se refiere a los tipos de regímenes penitenciarios regulados en nuestro ordenamiento, pueden distinguirse tres: régimen ordinario, régimen abierto y régimen cerrado.

El régimen ordinario se encuentra regulado en los arts. 76 a 79 RP. En este caso los principios de seguridad, orden y disciplina encuentran su razón de ser

²⁵ FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., NISTAL BURÓN, J., *Manual de Derecho Penitenciario*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, pág. 331.

y su límite en el logro de una convivencia ordenada, teniendo el trabajo y la formación la consideración de actividad básica en la vida del Centro (art. 76 RP).

El régimen abierto –también denominado de semilibertad– está pensado para aquellos reclusos que se encuentren clasificados en tercer grado de tratamiento (art. 80 RP)²⁶, pudiendo ser los establecimientos de tres tipos: centros abiertos o de inserción social, secciones abiertas y unidades dependientes. En estos casos, para decidir el destino del recluso se tiene en cuenta la ejecución del programa individualizado de tratamiento y, especialmente, las posibilidades de vinculación familiar del interno y su posible repercusión en el mismo, siendo ésta una clara alusión a su futura reinserción social. Es más, el art. 83 RP hace una referencia directa a este aspecto cuando afirma que “la actividad penitenciaria en régimen abierto tiene por objeto potenciar las capacidades de inserción social positiva que presentan los penados clasificados en tercer grado, realizando las tareas de apoyo y de asesoramiento y la cooperación necesaria para favorecer su incorporación progresiva al medio social”.

Por último, el régimen cerrado se encuentra regulado en los arts. 89 y ss. RP y, tal y como preceptúa el mencionado artículo, “será de aplicación a aquellos penados que, bien inicialmente, bien por una involución en su personalidad o conducta, sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto”. Se caracteriza porque su cumplimiento debe realizarse en “módulos de régimen cerrado o en departamentos especiales ubicados en Centros de regímenes comunes, con absoluta separación del resto de la población reclusa” (art. 90.1 RP). En estos casos, las celdas serán individuales y las actividades en común de los internos se limitarán, existiendo un mayor control y vigilancia sobre los mismos. De igual forma, se exigirá de manera especial el acatamiento de las medidas de seguridad, orden y disciplina, sin que el régimen de vida para estos internos establezca limitaciones

²⁶ En cuanto al sistema de clasificación por grados, *vid.* epígrafe 3.2. del presente trabajo.

regimentales iguales o superiores a las fijadas para el régimen de cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda²⁷ (art. 90 RP).

3.2. Tratamiento penitenciario y clasificación por grados

Partiendo de que el fin primordial de las Instituciones Penitenciarias es la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad (art. 1 LOGP), el art. 59.1 LOGP regula el tratamiento penitenciario como “el conjunto actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados”, es decir, como el mecanismo para alcanzar dicho fin. De esta forma se pretende que el interno termine siendo “una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general” (art. 59.2 LOGP).

Para poder aplicar un programa de tratamiento adecuado a cada interno es necesario utilizar el llamado sistema de clasificación por grados, que tiene como finalidad la agrupación de los internos conforme a sus características personales y a sus necesidades. Siguiendo a FERNÁNDEZ ARÉVALO y NISTAL BURÓN²⁸, a la hora de llevar a cabo la clasificación, se tienen en cuenta variables como las que a continuación se exponen:

- Criterios penales: duración de la condena, actividad delictiva, tipo de delito, condena impuesta, etc.
- Criterios penitenciarios: relativos a la conducta penitenciaria del interno.
- Criterios científicos: psicológicos, sociológicos...en los que se tiene en cuenta la personalidad del recluso, su historia personal, familiar, etc.

²⁷ El aislamiento en celda está previsto como una sanción (art. 233 RP) que puede ser impuesta a los internos que cometan faltas graves o muy graves, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 108 y 109 RP.

²⁸ FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., NISTAL BURÓN, J., *Derecho Penitenciario*, cit., pág. 612.

- Criterios indeterminados: medio al que probablemente retornará el interno y facilidades y dificultades para el éxito del tratamiento.

Los tratamientos serán siempre individualizados, pero esta clasificación permite que el suministro de los tratamientos a los internos sea más sencillo²⁹. La clasificación penitenciaria es el centro del sistema de individualización científica que consagra el art. 72.1 LOGP:

“Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional, conforme determina el Código Penal”.

El sistema de individualización científica “permite colocar al interno directamente en cualquiera de las fases (grados) del sistema, salvo la libertad condicional, dependiendo la permanencia en cada fase o grado de las circunstancias personales de los internos”³⁰. Para ello, de acuerdo con lo establecido en el art. 63 LOGP, “(...) tras la adecuada observación de cada penado, se realizará su clasificación, destinándose al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado, y, en su caso, al grupo o sección más idóneo dentro de aquél. La clasificación debe tomar en cuenta no solo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales en su caso, el medio a que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento”.

Este sistema de cumplimiento responde a la idea de una ejecución siguiendo un programa individualizado que se aplica a través de la utilización de métodos científicos (médicos, psicológicos, sociológicos...); pero la realidad penitenciaria viene determinada en gran medida por la superpoblación reclusa y por la escasez de recursos, por lo que –*de facto*– el tratamiento es mucho

²⁹ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, C., *La clasificación inicial en tercer grado de tratamiento penitenciario: Desde su contexto legal a su aplicación práctica*, Universidad de Murcia, 2012, pág. 51.

³⁰ FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., NISTAL BURÓN, J., *Derecho Penitenciario*, cit., pág. 609.

más simple de lo que prevé la normativa, evolucionando con el paso de los años hacia una perspectiva menos clínica y más social³¹.

La clasificación penitenciaria constituye el primer eslabón en el camino que permita al interno su resocialización³², motivo por el cual el legislador ha establecido un plazo máximo de dos meses para que el centro penitenciario clasifique al interno con el fin de que éste reciba lo antes posible su tratamiento (art. 103 RP).

Conforme a lo dispuesto en el art. 102 RP, la clasificación será la siguiente:

- Se clasificará en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, ponderando los factores que se mencionan en el art. 102.5 RP.
- Serán clasificados en segundo grado los penados en quienes concurren unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad.
- La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.

En definitiva, partiendo de que el fin primordial de las Instituciones Penitenciarias es lograr la reeducación y la reinserción social de los reclusos, la LOGP establece que el tratamiento penitenciario es el mecanismo más adecuado para su consecución. Ahora bien, para que cada interno pueda recibir su propio tratamiento de forma individualizada, es necesario que éstos se encuentren clasificados en grados, para lo cual se utiliza el sistema de individualización científica, que consiste en un análisis de las circunstancias personales de cada recluso para su posterior clasificación.

Por último, no se puede dejar de lado la realidad carcelaria de nuestro país. El mandato constitucional y las previsiones normativas son claras y prevén un

³¹ JUANATEY DORADO, C., *Manual de derecho penitenciario*, cit., pág. 118.

³² FERNÁNDEZ APARICIO, J.M., *Derecho Penitenciario. Comentarios Prácticos*, cit., pág. 28.

escenario dentro de prisión en el que parece fácil que a cada interno se le proporcione un tratamiento y que la clasificación por grados surta los efectos previstos. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La previsión del art. 25.2 CE en lo que se refiere a la reeducación y la reinserción social no se está alcanzando³³, cuestión capital a tratar en el presente trabajo y que se irá exponiendo a lo largo de las páginas restantes.

3.3. Formación y trabajo penitenciario

El trabajo penitenciario es aquel que realizan los reclusos en el ámbito penitenciario, teniendo en cuenta que al tratarse de sujetos privados de libertad es indiferente que lo realicen dentro o fuera del recinto carcelario³⁴.

En relación con lo anteriormente expuesto sobre el tratamiento, es necesario apuntar que el trabajo penitenciario está íntimamente ligado con aquel, ya que “ayuda a mejorar la estabilidad emocional de las personas presas, a reducir la conflictividad y a garantizar el orden y la disciplina en el interior del establecimiento penitenciario y, además, también contribuye o puede contribuir a la resocialización”³⁵.

En cuanto a su regulación, se hace referencia al trabajo penitenciario tanto en los arts. 26 y ss. LOGP como en los arts. 132 y ss. RP. De este articulado se desprende que el trabajo penitenciario es tanto un derecho como un deber de los reclusos, que muchas veces se hace imprescindible para ellos por sus características personales y se incluye directamente en su tratamiento como una parte fundamental del mismo.

³³ En lo que se refiere a las diferencias que existen entre la previsión normativa y la realidad de la vida en prisión *vid.* CONDE, M., *Derecho penitenciario vivido*, Editorial Comares, Granada, 2006, pág. 43 y ss.

³⁴ *Cfr.* CERVELLÓ DONDERIS, V., *Derecho Penitenciario*, *cit.*, pág. 211, donde cita a DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L., “Trabajo. Introducción al capítulo II”, en *Comentarios a la legislación penitenciaria*, dirigidos por M. Cobo del Rosal, Tomo VI Vol I, Edersa, Madrid, 1986, pág. 402.

³⁵ GONZÁLEZ COLLANTES, T., “El trabajo penitenciario como derecho y como deber”, *Revista del Instituto Universit. de investigación en Criminología y Ciencias Penales de la UV*, Nº 11, Valencia, 2014, pág. 2.

Se cuestiona en este punto si el derecho al trabajo penitenciario es un Derecho Fundamental del que gozan los reclusos, dado que el art. 25.2 CE *in fine* –recordemos que este precepto ya ha sido mencionado al comienzo de este trabajo– establece que:

“(…) En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

Teniendo en cuenta únicamente este precepto, podría decirse que existe un Derecho Fundamental de los reclusos a obtener un trabajo remunerado. Sin embargo, autores como DE BARTOLOMÉ CENZANO, CABO DEL ROSAL o GARRIDO GUZMÁN han entendido que, a pesar de que el trabajo penitenciario es una cuestión capital en la futura reinserción social de los reclusos y de la orientación resocializadora que deben tener las penas privativas de libertad, no estamos ante un reconocimiento distinto del que hace el art. 35.1 CE³⁶ a favor de los ciudadanos; es decir, se trataría de un principio tutelar del derecho consagrado en el mencionado artículo³⁷.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto indicando que, en realidad, existe un derecho prestacional de los internos que obliga a la Administración Penitenciaria a utilizar todos los medios que estén a su alcance para dar cumplimiento al mandato constitucional del art. 25.2, pero no un Derecho Fundamental al trabajo para los internos³⁸. Por lo tanto, cuando

³⁶ Art. 35.1 CE: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

³⁷ Cfr. GONZÁLEZ COLLANTES, T., “El trabajo penitenciario como derecho y como deber”, *cit.*, pág. 6, donde cita a COBO DEL ROSAL, M. – BOIX REIG, J., “Artículo 25. Garantía Penal”, en ALZAGA VILLAAMIL, O. (Dir.), *Comentarios a las leyes políticas. Constitución Española de 1978*, tomo III, Edersa, Madrid, 1983, págs. 98 y 99, GARRIDO GUZMÁN, L., *Manual de ciencia penitenciaria*, Edersa, Madrid, 1983, pág. 345 y DE BARTOLOMÉ CENZANO, J.C., *El marco constitucional del trabajo penitenciario*, Nomos, Valencia, 2002.

³⁸ Así lo confirman la STC 22/1981, de 2 de julio: “el derecho al trabajo invocado en el artículo 35.1 de la Constitución en el aspecto de derecho genérico a incorporarse a la vida laboral y obtener un puesto de trabajo, aparece configurado más como un objetivo de la acción de los

hablamos de derecho al trabajo penitenciario nos referimos a un derecho subjetivo, no a un Derecho Fundamental.

Como se ha mencionado anteriormente, nuestro ordenamiento jurídico también concibe el trabajo penitenciario como un deber para los reclusos. A pesar de ello, la negativa a trabajar no implica que el interno sea sancionado, ya que no se contempla como tal en la normativa vigente, de igual forma que un ciudadano que goza de plena libertad no está obligado a realizar una actividad laboral, sino que podríamos hablar de un deber moral más que de un deber jurídico. Además, puede resultar incluso complicado no cumplir con el deber de realizar trabajos penitenciarios ya que, como se mostrará unas líneas más adelante, éste puede consistir en múltiples actividades y no siempre tiene que ser una relación laboral. Es necesario mencionar también que, aunque el trabajo penitenciario es una pieza fundamental en la labor resocializadora de las penas privativas de libertad y en el tratamiento de los reclusos, no se les puede obligar a realizarlos, ya que el mismo precepto 25.2 CE establece que “las penas privativas de libertad no podrán consistir en trabajos forzados”³⁹.

En lo que se refiere a las modalidades de trabajo penitenciario, el art. 27.1 LOGP establece las siguientes:

“El trabajo que realicen los internos, dentro o fuera de los establecimientos, estará comprendido en alguna de las siguientes modalidades:

- a) Las de formación profesional, a las que la administración dará carácter preferente.
- b) Las dedicadas al estudio y formación académica.
- c) Las de producción de régimen laboral o mediante fórmulas cooperativas o similares de acuerdo con la legislación vigente.

poderes públicos que como un derecho subjetivo frente al Estado” y la STC 172/1989, de 19 de octubre, en la que se afirma que el derecho al trabajo penitenciario es un derecho subjetivo pero no un Derecho Fundamental, es decir, se trata de un derecho prestacional condicionado por las posibilidades presupuestarias de la Administración Penitenciaria.

³⁹ GONZÁLEZ COLLANTES, T., “El trabajo penitenciario como derecho y como deber”, *cít.*, págs. 10 y ss.

- d) Las ocupacionales que formen parte de un tratamiento.
- e) Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento.
- f) Las artesanales, intelectuales y artísticas”.

A pesar de esta clasificación, el trabajo penitenciario se divide fundamentalmente en dos modalidades: el trabajo productivo y el trabajo no productivo⁴⁰. El trabajo productivo es aquel que el recluso realiza por cuenta ajena dentro o fuera del establecimiento penitenciario y que está cubierto por la Seguridad Social, mientras que el trabajo no productivo engloba los talleres ocupacionales y las actividades de formación y culturales, tal y como establece el art. 153 RP.

En definitiva, a pesar de que el trabajo penitenciario puede ser considerado tanto un derecho como un deber de los reclusos, *de facto* ni se trata de un Derecho Fundamental –sino más bien de un mandato dirigido a la Administración Penitenciaria para que utilice todos sus recursos–, ni se trata de un deber jurídico de los internos –sino que podríamos estar hablando de un deber moral– que, como acabamos de ver puede cumplirse haciendo trabajos productivos o trabajos no productivos.

⁴⁰ GONZÁLEZ COLLANTES, T., “El trabajo penitenciario como derecho y como deber”, *cit.*, pág. 3.

4. ALTERNATIVAS AL INGRESO EN PRISIÓN

El Derecho Penal se caracteriza por ser la rama del ordenamiento jurídico que está compuesta por una serie de normas cuya infracción puede dar lugar a una pena privativa de libertad. Sin embargo, teniendo en cuenta que la pena tiene una finalidad preventiva especial, es decir, que pretende que quien ha sido condenado no vuelva a cometer ningún delito, se abre la puerta a las alternativas al ingreso en prisión. Éstas encuentran su razón de ser en dicha finalidad preventiva especial, ya que hacen que sea más fácil evitar que se cometan futuros delitos y a la vez contribuyen a la reinserción social de los condenados⁴¹. Además, la privación de libertad debe ser *última ratio* en el sistema de sanciones –es decir, la última medida a tomar–, de forma que si es posible imponer una pena que limite en menor medida los derechos de los individuos, siempre convendrá aplicarla en lugar de la pena privativa de libertad⁴².

4.1. Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad

La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad está regulada en los arts. 80 a 87 CP. Consiste en dejar en suspenso la ejecución de la pena –siempre que ésta sea inferior a dos años– en aquellos casos en los que el Tribunal considere que la ejecución de la pena no va a ser necesaria para evitar que el condenado vuelva a delinquir. Para que pueda aplicarse la suspensión de la que hablamos, el propio art. 80.2 CP regula los requisitos que serán necesarios:

- Que el condenado haya delinquido por primera vez.
- Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años.

⁴¹ PRAT WESTERLINDH, C., *Alternativas a la prisión. Comentarios a las reformas introducidas por las Leyes Orgánicas 15/2003, 11/2003 y 7/2003*, Dykinson, Madrid, 2004, pág. 12 y ss.

⁴² La prisión como *última ratio* es uno de los principios básicos de la política criminal europea en materia de sanciones alternativas a la prisión; *vid.* CID, J., “La política criminal europea en materia de sanciones alternativas a la prisión y la realidad española: una brecha que debe superarse”, *Estudios penales y criminológicos*, vol. XXX, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2010, pág. 63.

- Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles.

La suspensión quedará condicionada a que el condenado no delinca en el plazo que establezca el Tribunal, que será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad inferiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves (art. 81 CP).

Cuando el Tribunal lo considere oportuno para evitar la comisión de futuros delitos, puede condicionar la suspensión al cumplimiento de determinados deberes o prohibiciones que están recogidos en el art. 83.1 CP y que son los siguientes:

- Prohibición de aproximarse a la víctima, familiares, domicilios, lugares de trabajo, etc.
- Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado.
- Mantener su lugar de residencia en un lugar determinado, sin poder abandonarlo o ausentarse mientras no medie autorización del juez o tribunal.
- Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo.
- Comparecer personalmente con la periodicidad que se determine ante el juez o tribunal, dependencias policiales o servicio de la administración que se determine.
- Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de igualdad de trato y no discriminación, etc.
- Participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes.
- Prohibición de conducir vehículos de motor.

Además, la suspensión de la ejecución de la pena también podrá quedar condicionada al cumplimiento de alguna de las siguientes prestaciones o medidas:

- El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.

- El pago de una multa.
- La realización de trabajos en beneficio de la comunidad.

Con anterioridad a la reforma efectuada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, este cuerpo legal contemplaba la sustitución de la pena de prisión en su art. 88, de forma que podía imponerse una multa, trabajos en beneficio de la comunidad o la pena de localización permanente⁴³ en lugar del ingreso en prisión; sin embargo, la mencionada ley ha derogado el sistema de sustitución que contemplaba el art. 88 CP, de forma que actualmente las penas privativas de libertad únicamente podrán suspenderse –y no sustituirse– en los términos ya mencionados⁴⁴.

En definitiva, la suspensión de la ejecución de la pena podrá llevarse a cabo siempre que el condenado cumpla los requisitos que exige el Código Penal y siempre que no incumpla las prohibiciones, deberes o prestaciones que el Tribunal ha acordado, ya que en caso contrario la suspensión dejará de surtir efecto.

4.2. Trabajo en beneficio de la comunidad

El trabajo en beneficio de la comunidad está configurado como una pena leve cuando su duración es de uno a treinta días (art. 33.4. i) CP) y como una pena menos grave cuando su duración es de treinta y un días a un año (art. 33.3. I) CP). Esta alternativa a prisión no es una pena privativa de libertad, sino que se trata de una pena privativa de derechos conforme a lo preceptuado en el art. 39 CP.

En cuanto a su regulación como pena privativa de derechos, el art. 49 CP establece en qué consisten los trabajos en beneficio de la comunidad de la siguiente forma:

⁴³ La pena de localización permanente se encuentra regulada en el art. 37 CP, siendo su duración máxima de seis meses y configurándose como una pena privativa de libertad conforme al art. 35 CP.

⁴⁴ GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P., “Cinco cuestiones sobre la nueva suspensión-sustitución de las penas privativas de libertad”, *Diario La Ley*, N°8688, 2016, pág.1.

“Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares”.

El mismo precepto se encarga de delimitar cuáles son las condiciones para que los TBC se lleven a cabo:

- Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y será facilitado por la Administración.
- La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que requerirá los informes que correspondan sobre el trabajo realizado.
- No atentará a la dignidad del penado.
- En materia de Seguridad Social, tendrán la misma protección que los penados.
- No se supeditará al logro de intereses económicos.
- Los servicios sociales penitenciarios comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena (ausencias, bajo rendimiento, incumplimiento de órdenes, mala conducta...).
- Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de la actividad, sino que el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena.

El TBC como alternativa a la pena de prisión ha sido valorado de forma positiva por el efecto reparador que obtienen las víctimas, ya que el condenado actúa directamente realizando determinados trabajos que llevan implícita esa connotación de reparación para las víctimas –connotación que no lleva

aparejada la multa o la privación de libertad—. Además, el condenado debe aceptar personalmente la imposición de esta pena⁴⁵, por lo que debe entender que mediante ella estará intentando reparar el daño causado, comprobando por sí mismo cómo dicha reparación conlleva un esfuerzo. De esta forma, puede que sea más sencillo conseguir que el penado se reconcilie con las víctimas y, por ende, que alcance la reinserción social que se pretende mediante la imposición de una pena⁴⁶.

El perfil de personas a quienes puede aplicarse la pena de TBC⁴⁷ oscila entre los 18 y los 76 años, ya que a los menores de edad se les aplicaría la medida correspondiente denominada prestaciones en beneficio de la comunidad. A pesar de que puede ser aplicada a cualquier individuo mayor de edad, la media se encuentra en 38,64 años. En cuanto al sexo de los penados con TBC, podemos decir que los hombres representan un 91,1% mientras que las mujeres representan un 8,9%, siendo la diferencia muy amplia entre unos y otros.

En cuanto al aumento en la imposición esta alternativa a prisión, puede decirse que si en el año 1999 las sanciones de TBC dictadas en España fueron de 453, en el año 2005 esta cifra se incrementó hasta alcanzar las 4.916 sanciones —quizá debido a la modificación del Código Penal en 2004—⁴⁸.

⁴⁵ La aceptación por parte del condenado es el medio utilizado para evitar incurrir en inconstitucionalidad, dado que el art. 25 CE proscribía los trabajos forzados; *vid.* FERNÁNDEZ APARICIO, J.M., *Derecho Penitenciario. Comentarios Prácticos*, cit., pág. 119.

⁴⁶ JUAN ALBALATE, J., “El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión. Entre la aceptación y el rechazo”, *Revista Internacional de Sociología*, VOL. 67, Nº 2, Mayo - Agosto, 2009, pág. 382.

⁴⁷ En lo que se refiere a los datos estadísticos sobre este asunto, *cfr.* GONZÁLEZ TASCÓN, M.M., LOREDO COLUNGA, M., ROCA AGAPITO, L., VILLA SIEIRO, S.V., ALBUERNE GUTIÉRREZ, M.A, BRAVO ARTEAGA, A., “Aproximación a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad a partir de la evidencia empírica: la aplicación judicial de la pena”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, Nº 17-08, 2015, pág. 7 y ss., donde se exponen los resultados de un estudio empírico realizado durante el segundo semestre del año 2013.

⁴⁸ JUAN ALBALATE, J., “El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión...”; *cit.*; pág. 383.

Desde mi punto de vista, y a pesar de que existan objeciones a la imposición de TBC⁴⁹, esta pena contribuye a la consecución del mandato constitucional que ordena a los poderes públicos emplear los recursos necesarios para que los condenados alcancen la reinserción social de la que habla el art. 25.2 CE. Y esto no solo porque el condenado debe aceptar la imposición de esta pena –lo que por otra parte limita su aplicación–, sino también porque puede ayudar a que los prejuicios que existen en la sociedad hacia los reclusos sean menores.

4.3. Alternativas en función de la peligrosidad del sujeto: medidas de seguridad

Las medidas de seguridad no son propiamente una alternativa a la pena de prisión, sino que se aplican a sujetos que por sus características personales no pueden recibir una pena, como por ejemplo a los semiimputables. Por lo tanto, aunque conceptualmente no son una alternativa a prisión como las mencionadas en los epígrafes anteriores, tienen cabida en este capítulo ya que son necesarias para aquellos individuos que no pueden recibir una pena de prisión.

En cuanto al concepto de medidas de seguridad, autores como SANZ MORÁN las definen como “un mecanismo jurídico-penal de respuesta al delito, complementario de la pena, aplicado conforme a la ley, por los órganos jurisdiccionales, en atención a la peligrosidad del sujeto, con finalidad correctora o asegurativa”⁵⁰.

⁴⁹ Frente a las posiciones favorables al TBC –que se fundamentan principalmente en su carácter reeducativo y reparador, surgen objeciones que se apoyan en cuestiones como la sustracción de puestos de trabajo, la posibilidad de que sean trabajos forzados, etc.; para tener una visión más amplia de estas objeciones *vid.* JUAN ALBALATE, J., “El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión...”; *cít.*; pág. 385.

⁵⁰ *Cfr.* TAPIA BALLESTEROS, P., “Las medidas de seguridad. Reformas más recientes y últimas propuestas”, en *Revista jurídica de Castilla y León*, Nº 32, enero de 2014, pág. 3, donde cita a SANZ MORÁN, A.J., *Las medidas de corrección y de seguridad en el Derecho Penal*, Lex Nova, Valladolid, 2003, pág. 71.

Partiendo de esta definición se entiende que, mientras las penas se fundamentan en la culpabilidad del individuo, las medidas de seguridad lo hacen en la peligrosidad del mismo, extremo difícilmente acreditable o, al menos, extremo que puede dar lugar a controversias a la hora de delimitar dicha peligrosidad. Por lo tanto, se aplican una vez cometido el hecho delictivo, decidiéndose en ese punto cuál es la peligrosidad del sujeto y aplicándose la medida de seguridad que más se adecúe a sus características personales. Las medidas de seguridad tienen una finalidad preventiva especial que, al igual que en el caso de la pena⁵¹, consiste en evitar que el individuo vuelva a cometer un hecho delictivo.

En cuanto a su regulación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es el Código Penal el que se encarga de ello dedicando el Capítulo I del Título IV a las mismas. Tal y como preceptúa el art. 96 CP, las medidas de seguridad pueden clasificarse en dos grupos y son las siguientes:

- Privativas de libertad
 - Internamiento en centro psiquiátrico.
 - Internamiento en centro de deshabituación.
 - Internamiento en centro educativo especial.
- No privativas de libertad
 - Inhabilitación profesional.
 - Expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.
 - Libertad vigilada.
 - Custodia familiar.
 - Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
 - Privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

⁵¹ Sobre la finalidad de la pena *vid.* epígrafe 1.2. del presente trabajo.

Una vez expuestas cuáles pueden ser las medidas de seguridad, no nos ocupa definir cada una de ellas ni examinarlas individualmente, sino que en este apartado corresponde mostrar cómo se aplican y cuáles son las controversias a las que pueden dar lugar.

En cuanto a su aplicación, podrá imponerse una medida de seguridad privativa de libertad a aquellos individuos que hayan sido declarados exentos de responsabilidad criminal conforme al art. 20.1º CP, siendo éstos internados en un centro médico o educativo especial en función de la anomalía psíquica que presenten; así mismo, podrá imponerse una medida no privativa de libertad cuando el juez o tribunal lo estime oportuno conforme a lo expuesto en los arts. 105 y ss. CP. En los casos en los que concurren penas y medidas de seguridad privativas de libertad, será de aplicación el art. 99 CP:

“(…) el juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. Una vezalzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 96.3”.

La polémica en relación con las medidas de seguridad surge en torno a su duración. Es el art. 6.2. CP el que establece lo siguiente:

“Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor”.

Por lo tanto, por razones de seguridad jurídica, las medidas de seguridad quedan limitadas al tiempo y gravedad de la pena que fuera aplicable, ya que de otra forma podría estar imponiéndose una medida indefinida en el tiempo; y al mismo tiempo se encuentran limitadas por la peligrosidad del individuo, es decir, que está presente el criterio de proporcionalidad. Ahora bien, lo confuso de este precepto es que si tomamos dichos límites como referencia para la imposición de medidas de seguridad podría darse la situación en la que un

sujeto haya cumplido la medida de seguridad pero siga existiendo la peligrosidad que existía en un principio. En ese caso, el legislador está asumiendo el riesgo de que un sujeto potencialmente peligroso para la sociedad quede en libertad en aras de defender la seguridad jurídica, ya que de otra forma –es decir, atendiendo a la peligrosidad del sujeto– estaríamos abriendo la puerta a una posible imposición de medidas de seguridad indeterminadas⁵². A pesar de ello, existe la posibilidad de imponer la medida de libertad vigilada a los sujetos condenados por delitos de terrorismo o por delitos sexuales, presumiendo el legislador de forma absoluta su futura peligrosidad⁵³.

4.4. Situación europea en materia de alternativas a prisión⁵⁴

Corresponde hacer mención en el presente trabajo a la política criminal europea en materia de sanciones alternativas a la pena de prisión ya que España debería seguir sus directrices en lo que se refiere a este asunto. En primer lugar, la política criminal europea sienta sus bases sobre dos principios: la prisión como *ultima ratio* y las sanciones alternativas a la prisión como respuesta normal ante un hecho delictivo.

La razón por la que la prisión debe ser la última medida a tomar ante un hecho delictivo es que aquella priva al sujeto de su libertad –Derecho Fundamental consagrado en el art. 17 CE–. Además, la prisión tiene graves consecuencias negativas para los internos: restricciones personales y para con su familia, dificultades para su rehabilitación, problemas en la gestión de los establecimientos penitenciarios cuando éstos se encuentran masificados, etc.

⁵² Cfr. ALONSO RIMO, A., “Medidas de seguridad y proporcionalidad con el hecho cometido (a propósito de la peligrosa expansión del derecho penal de la peligrosidad”, *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. XXIX, Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 2009, pág. 120.

⁵³ TAPIA BALLESTEROS, P., “Las medidas de seguridad. Reformas más recientes y últimas propuestas”, *cít.*, pág. 11.

⁵⁴ Para la redacción de este apartado del trabajo se ha utilizado el siguiente documento: CID, J., “La política criminal europea en materia de sanciones alternativas a la prisión y la realidad española: una brecha que debe superarse”, *Estudios penales y criminológicos*, vol. XXX, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2010, págs. 55-83.

Por otro lado, las sanciones alternativas a la prisión deberían ser la respuesta normal ante la comisión de un delito ya que sus efectos sobre los condenados son más favorables que el encarcelamiento. Asimismo, contribuyen activamente a conseguir el fin de la imposición de una pena, que es la resocialización y la reinserción social de los penados. En cuanto a la capacidad que tienen para cumplir con dicha finalidad de la pena, las recomendaciones europeas señalan que “son capaces de satisfacer el principio de proporcionalidad, son idóneas –cuando toman en consideración el riesgo y necesidades del infractor– para proteger a la colectividad, permiten satisfacer el principio de rehabilitación, al afrontar las necesidades del infractor y los factores vinculados al desistimiento del delito, y pueden fomentar la responsabilidad del infractor con referencia a la sociedad en general y a la víctima en particular”⁵⁵.

A pesar de estas recomendaciones las sanciones penales en España no cumplen con la política criminal europea, sino que distan de ella en los siguientes puntos⁵⁶:

- “- Carencia de un sistema organizado de resolución extrajudicial de conflictos (...)
- Carencia de un sistema suficiente de alternativas a la prisión preventiva (...)
- Carencia de un sistema suficientemente individualizado de penas alternativas a la prisión (...)
- Carencia de normas específicas en la legislación que establezcan la preferencia de la sanción alternativa a la prisión (...)
- Carencia del informe pre-sentencia obligatorio (...)
- Carencia de una regulación que establezca la finalización de las sanciones alternativas por el cumplimiento de sus finalidades (...)

⁵⁵ CID, J., “La política criminal europea en materia de sanciones alternativas a la prisión y la realidad española...”, *cít.*; pág. 62.

⁵⁶ CID, J., “La política criminal europea en materia de sanciones alternativas a la prisión y la realidad española...”, *cít.*; pág. 63 y ss.

- Supuestos de revocación automática de la pena alternativa por el incumplimiento de sus condiciones (...)
- Carencias en el sistema de libertad condicional (...)
- Carencia de un servicio autónomo de cumplimiento de sanciones en la comunidad (...)"

En definitiva, a pesar de que en España existen alternativas a la pena de prisión, nuestra regulación dista mucho de aproximarse a las recomendaciones de la política criminal europea, haciendo que el fin primordial de la pena –la resocialización y la reinserción social de los reclusos– también sea más difícil de alcanzar.

5. PERSPECTIVA APLICADA DE LA FUNCIÓN RESOCIALIZADORA DE LA PENA

Como se ha ido exponiendo a lo largo del presente trabajo, la normativa penitenciaria vigente en nuestro país indica de forma muy clara cuáles deben ser los fines de la imposición de una pena privativa de libertad, así como los mecanismos que debe utilizar la Administración Penitenciaria para su consecución. Por ello es necesario traer a colación el ya mencionado art. 25.2 CE:

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán *orientadas hacia la reeducación y reinserción social* y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los Derechos Fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

De igual forma, es imprescindible mencionar en este punto el art. 3.3 RP, ya que establece que los reclusos no pueden verse excluidos de la sociedad por el mero hecho de haber sido condenados a una pena privativa de libertad:

“Principio inspirador del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad será la consideración de que el interno es sujeto de derecho y *no se halla excluido de la sociedad*, sino que continúa formando parte de la misma. En consecuencia, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los vínculos sociales, la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas y el acceso a las prestaciones públicas”.

Una vez mencionados estos dos artículos, a título personal me surge una cuestión que quizá pueda responder al finalizar el presente estudio; es la siguiente: ¿Si el fin primordial de la pena privativa de libertad es conseguir la

reinserción del recluso, qué sentido tiene aislarlo del resto de la sociedad? O dicho de otra forma, ¿por qué no se utilizan más las alternativas a la pena de prisión? Pero, una vez el recluso ha sido internado en un centro penitenciario, ¿son efectivos los métodos utilizados para conseguir la reinserción?

Por el momento, y dado que la pena privativa de libertad tiene un gran peso en nuestro sistema, se intentará analizar cuáles son los mecanismos que utiliza la Administración Penitenciaria para fomentar la resocialización y la reinserción social de los reclusos a pesar de que estén cumpliendo su condena en un centro penitenciario.

En primer lugar, la clasificación por grados. Con anterioridad se ha hecho referencia en este trabajo al sistema de clasificación por grados que opera actualmente en nuestro país. Pues bien, es fundamental hacer hincapié en él ya que dicha clasificación resulta imprescindible para separar a los reclusos conforme a sus características personales, teniendo en cuenta las variables que se mencionaban en el epígrafe 3.2. Al tener en cuenta estas variables se obtiene una imagen global del individuo y, a partir de ahí, se determina en qué grado debe clasificarse y también qué tratamiento debe seguir, ya que el tratamiento está compuesto por las medidas que –en teoría– permitirán modificar el comportamiento antisocial que ha tenido el recluso durante su vida en libertad; es decir, supone una terapia, una superación de las causas que llevaron al individuo a delinquir, de forma que finalmente su resocialización sea posible⁵⁷.

De hecho, la ejecución de un tratamiento individualizado es tan importante para la reinserción social del recluso que la evolución en el mismo permite modificar la clasificación del interno. Así lo preceptúa el art. 65 LOGP:

“La evolución en el tratamiento determinará una nueva clasificación del interno, con la consiguiente propuesta de traslado al establecimiento del régimen que corresponda, o, dentro del mismo, el pase de una sección a otra de diferente régimen”.

⁵⁷ TORO, M. C., *La pena de prisión en busca de sentido. El fin de la pena privativa de libertad en los albores del siglo XXI*, Universidad de Salamanca, 2013, pág. 188.

Para la ejecución del tratamiento, la Administración Penitenciaria ofertará una serie de actividades en las que los reclusos deben participar si quieren ser valorados óptimamente en la evolución del mismo. Entre estas actividades se encuentran, por ejemplo, los siguientes programas: para el control de la agresión sexual, de tratamiento para maltratadores en el ámbito familiar, de concienciación a narcotraficantes, de tratamiento a drogodependientes, etc.⁵⁸.

La evolución favorable en el tratamiento posibilitará, además de la evolución en grado, que el interno sea propuesto para la obtención de beneficios penitenciarios –ya mencionados en el presente trabajo– así como para otras figuras penitenciarias como los permisos de salida (regulados en el art. 154 y ss. RP). Éstos últimos han sido valorados positivamente por el Tribunal Constitucional, que ya en su Sentencia 112/96, de 24 de junio, se pronunciaba de la siguiente forma: “Todos los permisos cooperan potencialmente a la preparación de la vida en libertad del interno, pueden fortalecer los vínculos familiares, reducen las tensiones propias del internamiento y las consecuencias de la vida continuada en prisión que siempre conlleva el subsiguiente alejamiento de la realidad diaria. Constituyen un estímulo a la buena conducta, a la creación de un sentido de responsabilidad del interno, y con ello al desarrollo de su personalidad. Le proporcionan información sobre el medio social en el que ha de integrarse, e indican cual es la evolución del penado”. Es decir, los permisos de salida contribuyen favorablemente la reinserción social del recluso, haciendo que la vida en libertad le sea más fácil una vez haya cumplido su condena.

Además, dado que uno de los pilares de nuestro sistema penitenciario es que el recluso no es un individuo separado de la sociedad, éste puede seguir teniendo contacto con el exterior, bien de forma directa –a través de los permisos de salida ya mencionados o mediante las comunicaciones y visitas–,

⁵⁸ Para un conocimiento más extenso de estos programas *vid.* ROMERO QUINTANA, M., “Programas de tratamiento psicológico penitenciario” en CARCEDO GONZÁLEZ, R. J., REVIRIEGO PICÓN, F. (eds.), *Reinserción, derechos y tratamiento en los centros penitenciarios*, Amaru, Salamanca, 2007, pág. 20 y ss.

bien de forma indirecta –a través de los medios de comunicación escritos y telefónicos–⁵⁹.

Si el interno sigue evolucionando de forma favorable en el tratamiento terminará por ser clasificado en el tercer grado, es decir, pasará al régimen abierto o de semilibertad, penúltima instancia en su camino hacia la reinserción. En este régimen rigen los principios de auto responsabilidad y confianza, normalización social e integración y atenuación de las medidas de control, buscando así facilitar su participación plena y responsable en la vida familiar, sin perjuicio de que se realice un seguimiento de las actividades del recluso fuera del establecimiento⁶⁰.

En última instancia, al recluso se le podrá conceder la libertad condicional. Otorgada ésta cuando el interno cumple ciertos requisitos que permiten augurar una reinserción social plena, no hay que olvidar que dicha reinserción está íntimamente ligada con la seguridad de la población y que, ante el derecho que tienen los reclusos a la resocialización, existe también el derecho a la seguridad que tiene la sociedad.

Es decir, una vez evaluado, “(...) podría suceder que lo que ha aprendido el interno durante su estancia previa en la prisión sea a convivir mejor con las personas y problemas que existen dentro de ella, comprometiéndose así los efectos positivos de su estancia fuera del recinto penitenciario. Por tanto, que se conceda al individuo el permiso para retornar a la sociedad, provisional o definitivamente, a partir de haber evaluado la evolución positiva de su comportamiento dentro de la prisión, no siempre es garantía suficiente de que esté preparado para vivir de nuevo en su comunidad. Puede que sí, pero puede suceder también que sea aparente”⁶¹.

⁵⁹ Para un conocimiento más amplio de las comunicaciones y visitas *vid.* FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., NISTAL BURÓN, J., *Derecho Penitenciario, cit.*, pág. 782 y ss.

⁶⁰ POLETTI ADORNO, A. M., “Los permisos de salida y el régimen abierto en la reinserción” en CARCEDO GONZÁLEZ, R. J., REVIRIEGO PICÓN, F. (eds.), *Reinserción, derechos y tratamiento...*, *cit.*, pág. 119.

⁶¹ JUAN ALBALATE, J., “El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión...”; *cit.*; pág. 386.

Efectivamente, cumplir con el mandato constitucional que obliga a la Administración Penitenciaria a reinserir en la sociedad a los reclusos es un riesgo que el Estado y la sociedad deben asumir, porque de otra forma el mencionado mandato no serviría de nada. Para ello, para que la resocialización de los reclusos sea efectiva, debe modificarse tanto la concepción que tenemos del régimen abierto como la mentalidad de la sociedad. En palabras de JUAN ALBALATE⁶²: “Si el régimen abierto sigue reproduciendo el mismo ideario, los mismos criterios de funcionamiento y organización internos (...) seguirá sin poder hacer realidad el mandato constitucional reeducativo y resocializador de los sujetos condenados, aunque se dignifique la pena. Ahora bien, por mucho que se humanizaran las prisiones, si no se transforma también la sociedad, será difícil que se supriman las contradicciones entre ambas. De nada sirve la prisión abierta, si no se abre a la comunidad y viceversa (...) Pero si la prisión se cierra a la sociedad, no es solo por la dinámica interna que en ella se desarrolla frente a la estigmatización del exterior, sino porque es la sociedad la que, primeramente, la etiqueta de ‘peligrosa’ para protegerse de ella”.

Ahora bien, es necesario analizar también cuál es el comportamiento de los reclusos cuando alcanzan la libertad; esto es, si consiguen vivir sin volver a delinquir o no. En la siguiente tabla se puede observar el tiempo que tardan los reclusos en reingresar en prisión por reincidencia⁶³:

	Excarcelados 1997 Tasa 2002 (%)	Excarcelados 2002 Tasa 2008 (%)	Excarcelados 2010 Tasa 2014 (%)
0-1 año	54,3	67,0	64,9
1-2 años	76,6	81,0	87,0
2-3 años	87,9	89,7	97,0
3-4 años	95,0	94,7	100,0
4-5 años	99,1	98,8	-
5-5,5 años	100,0	100,0	-

⁶² JUAN ALBALATE, J., “El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión...”; *cit.*; pág. 386.

⁶³ Tabla extraída de la investigación realizada por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Catalunya; CAPDEVILA CAPDEVILA, M. (coord.), *Tasa de reincidencia penitenciaria 2014*, Área de Investigación y Formación Social y Criminológica, Barcelona, 2015, pág. 132.

En esta tabla se pueden observar los porcentajes de reincidencia de los individuos excarcelados en 1997, 2002 y 2010, entre el primer y el quinto año y medio desde su puesta en libertad. A pesar de que las cifras varían de unos años a otros, lo que queda claro es que el primer año en libertad es crucial para la reinserción de los exreclusos. En los tres periodos de tiempo que se muestran, es durante el primer año en libertad cuando más de la mitad vuelve a delinquir, de forma que dos de cada tres reincidentes volverán a prisión en ese intervalo de tiempo. Por ello se considera necesario que tras la puesta en libertad, continúen tomándose medidas con el fin de que los reclusos alcancen la reinserción social. Pero además, vistas las estadísticas, es conveniente que estas medidas para fomentar la reinserción se concentren en el primer y segundo año de libertad, ya que a partir del tercero el porcentaje de reincidencia disminuye considerablemente⁶⁴.

Queda demostrado que la reincidencia sigue teniendo lugar a pesar de los preceptos que ordenan la reinserción social de los reclusos, y que la resocialización se alcanza en muy pocos casos; pero, ¿la causa de la reincidencia es la falta de aceptación social que tienen los reclusos una vez han sido puestos en libertad o, sin embargo, es su recaída en la delincuencia lo que provoca su rechazo en la sociedad?

Sea de una forma o de otra, normalmente el perfil de un individuo que vuelve a delinquir y que, por lo tanto, no ha logrado la reinserción social pretendida, es el siguiente⁶⁵:

- Más de la mitad tenían antecedentes penitenciarios en el momento de ingresar en prisión por la pena base. Su media de ingresos anteriores es muy alta: más de 2 por cada reincidente.
- En su primer ingreso en prisión son más jóvenes, de media.

⁶⁴ CAPDEVILA CAPDEVILA, M. (coord.), "Tasa de reincidencia penitenciaria 2014"...; *cit.*; pág. 132.

⁶⁵ CAPDEVILA CAPDEVILA, M. (coord.), "Tasa de reincidencia penitenciaria 2014"...; *cit.*; pág. 145.

- Dos tercios de los reincidentes habían cometido un delito contra la propiedad en la pena base. Una proporción similar había cumplido una condena inferior a 2 años.
- Durante esta estancia en prisión, una parte destacable de los reincidentes tuvo un comportamiento penitenciario conflictivo: el 42,8% protagonizó algún incidente y un tercio tuvo alguna regresión de grado.
- Muy pocos disfrutaron de permisos ordinarios (28,1%) y alrededor del 85% cumplió toda su condena en régimen cerrado.

Teniendo en cuenta estas características, tampoco resulta extraño que los reclusos que se adecúan a ellas no hayan alcanzado la reinserción social. Se trata, por lo general, de individuos que han cumplido su condena en régimen cerrado, es decir, que han sido clasificados en primer grado; por lo tanto, si han cumplido toda su condena en esas circunstancias, significa que su comportamiento no ha sido lo suficientemente bueno como para que en la revisión de grado éste sea modificado. Esto puede ser consecuencia de no seguir la ejecución del tratamiento, algo fundamental para que el recluso alcance la reinserción social. Y si a todo lo ya mencionado le sumamos el dato de que menos del 30% disfrutaron de permisos de salida ordinarios –medida esencial en el camino hacia la reinserción–, se dan precisamente todos los elementos necesarios para que un recluso no consiga alcanzar la resocialización.

Sin embargo, si observamos esta situación desde otra perspectiva, el sistema se ve de otra forma. Si quienes no consiguen la reinserción social que la Administración Penitenciaria pretende para todos reclusos, no lo hacen porque ellos mismos son los que no ponen de su parte para conseguirlo (mal comportamiento y, por ende, clasificación en primer grado y en régimen cerrado, no ejecución del tratamiento...), ello significará que quienes realmente quieren conseguir su propia reinserción en la sociedad, pueden lograrlo.

Quizá hablar de una forma tan genérica no sea correcto, ya que el estado de las prisiones españolas podría mejorar en bastantes aspectos y ello condiciona la futura reinserción de los reclusos que luchan por tener una vida en sociedad digna. En lo que se refiere a este asunto es GALLIZO, la que fuera Secretaria

General de Instituciones Penitenciarias desde el año 2004 hasta el 2011, quien mejor ilustra la realidad de las cárceles españolas. En muchas ocasiones no basta con que el recluso quiera rehabilitarse y volver a la sociedad como un individuo más, sino que para ello serían necesarios más recursos de los que actualmente están al alcance de la Administración Penitenciaria. Muchos reclusos se ven trasladados a otras prisiones por motivos de logística, obligándoles a abandonar el tratamiento que seguían en su centro penitenciario de origen y, en la mayoría de ocasiones, también se ven obligados a separarse de su familia, lo que en nada ayuda a la reinserción de estos individuos, como ya se ha visto con anterioridad⁶⁶.

Por lo tanto, según lo estudiado, considero que pueden hacerse dos precisiones:

- Por un lado clasificaría a los reclusos que no quieren conseguir la resocialización. En su caso la Administración Penitenciaria puede utilizar los medios adecuados y ponerlos a disposición de los internos, pero si éstos no ponen de su parte y se implican en los programas de tratamiento, trabajos penitenciarios, etc., nunca conseguirán rehabilitarse, de forma que unos años después de su puesta en libertad probablemente se encuentren entre los reincidentes.
- Por otro lado clasificaría a aquellos reclusos que quieren alcanzar la resocialización. En estos casos, cuando los reclusos se esfuerzan por cumplir con el tratamiento que se les ha impuesto, tienen buen comportamiento, participan en las actividades penitenciarias, etc., lo más lógico es que consigan reinserirse en la sociedad. Ahora bien, puede ocurrir también que los medios no sean suficientes, que el recluso sufra algún traslado, que esté alejado de su familia, que en la práctica el tratamiento no sea individualizado por la sobrepoblación de las prisiones... En definitiva, un sinfín de factores que pueden influir en la

⁶⁶ En lo que se refiere a estos asuntos *cfr.* GALLIZO, M., "*Penas y personas. 2.810 días en las prisiones españolas*", Editorial Debate, Barcelona, 2013, págs. 23-43, 169-173 y 277-289, donde se tratan principalmente los temas de los que se habla en el presente trabajo.

reinserción social de los reclusos y que, en muchos casos, impiden que la alcancen.

Al fin y al cabo, a pesar de que la resocialización y la reinserción social son un mandato constitucional, nada asegura su consecución. No solo por la actitud de los reclusos, que lógicamente influye en los resultados ya que es imposible obligar a alguien a comportarse conforme a la ley en un futuro o, al menos, a seguir un tratamiento que le ayude a ello, sino también porque los medios no son los adecuados y, si lo son, no son suficientes.

Quizá sea más lógico utilizar los medios de los que dispone la Administración Penitenciaria con aquellos que realmente quieran retornar a la sociedad e integrarse en ella sin violar la ley, de forma que para el resto el fin de la pena sea únicamente retributivo. O quizá no. Lo que sí deduzco después de realizar el presente trabajo es que hay desajustes: las disposiciones normativas, ese fin resocializador de la pena tan utópico, los propios reclusos, el rechazo de la sociedad... Algo no encaja cuando el fin primordial de la pena es la reinserción social y más de la mitad de los excarcelados regresan a prisión en su primer año en libertad.

CONCLUSIONES

I. La normativa penitenciaria es extensa, más extensa de lo que *a priori* aparenta, pero en todas las normas que regulan esta rama del Derecho se hace mención al mandato constitucional que ordena la resocialización como fin primordial de la pena. Además, no solo se tienen en cuenta las normas de aplicación directa como la LOGP o el RP, sino que son de gran importancia aquellas disposiciones normativas que regulan los derechos de los reclusos, ya que a pesar de estar en prisión siguen teniendo exactamente los mismos derechos que el resto de la sociedad, excepto –por razones obvias– el derecho a la libertad.

II. La obtención de beneficios penitenciarios resulta crucial para alcanzar la resocialización. Es algo que depende de diversos factores, entre ellos el comportamiento de los reclusos o el tiempo que hayan cumplido de su condena. Pero lo que queda patente es que la obtención de estos beneficios penitenciarios también pone de manifiesto el grado de preparación que tiene el recluso para la vida en libertad, cosa que quedará demostrada a medida que se confirme que el comportamiento del recluso a quien ha sido concedido un beneficio penitenciario es el adecuado.

III. En cuanto a los regímenes penitenciarios y a la clasificación en grados de los reclusos, tras analizar cada uno de ellos y ver el proceso por el que pasan los internos para ser clasificados –al menos en teoría–, se entiende que factores como el centro en el que cumplen condena o el tratamiento que siguen en función de sus características personales son aspectos claves en su posterior resocialización.

IV. Las alternativas a la pena privativa de libertad cobran especial importancia en relación con la resocialización del penado. No solo porque se utilizan menos de lo que se debería, sino porque su imposición es precisamente eso: una alternativa. En España, a pesar de que existen las medidas de seguridad o el trabajo en beneficio de la comunidad, la pena de prisión no es *ultima ratio*, no es la última medida a tomar. Tampoco se sigue la política criminal europea, de la que, como se ha podido observar, nos encontramos considerablemente alejados en estos momentos.

V. La teoría del Derecho Penitenciario tiene cosas buenas –como el sistema de individualización científica– y cosas malas –como el déficit en cuanto a las alternativas a la pena privativa de libertad–, pero de nada sirven unas u otras si en la práctica nada tienen que ver con lo preceptuado. Nos encontramos en un sistema que pretende que los reclusos no se sientan excluidos de la sociedad pero que los recluye en las prisiones (aunque en este punto no hay que olvidar la seguridad ciudadana), que pretende la reinserción de los condenados pero que no dispone de los medios necesarios para su consecución, que intenta preparar a los internos para la vida en libertad pero que no prepara a la sociedad para la recepción de los mismos en ella... contradicciones a las que no encuentro sentido.

VI. Vistos los datos y los casos analizados para la realización del presente trabajo, es difícil creer que el legislador realmente esté convencido de que el fin primordial de la pena es la resocialización y la reinserción social de los reclusos ya que, más bien, todo ello resulta una utopía. Además, nada hace para que la sociedad aprenda a aceptar a quienes ya han cumplido su condena –si es que hay alguna manera de que esto sea posible– de forma que tanto los reclusos como la sociedad se encuentran, a pesar de los esfuerzos realizados por la Administración Penitenciaria, en compartimentos prácticamente estancos que en muy pocas ocasiones llegan a estar comunicados.

BIBLIOGRAFÍA

- CAPDEVILA CAPDEVILA, M. (coord.), *Tasa de reincidencia penitenciaria 2014*, Área de Investigación y Formación Social y Criminológica, Barcelona, 2015.
- CARCEDO GONZÁLEZ, R. J., REVIRIEGO PICÓN, F. (eds.), *Reinserción, derechos y tratamiento en los centros penitenciarios*, Amaru, Salamanca, 2007.
- CERVELLÓ DONDERIS, V., *Derecho Penitenciario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.
- CID, J., “La política criminal europea en materia de sanciones alternativas a la prisión y la realidad española: una brecha que debe superarse”, *Estudios penales y criminológicos*, vol. XXX, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2010, págs. 55-83.
- CONDE, M., *Derecho penitenciario vivido*, Editorial Comares, Granada, 2006.
- DELGADO DEL RINCÓN, L.E., “El artículo 25.2 CE: algunas consideraciones interpretativas sobre la reeducación y la reinserción social como fin de las penas privativas de libertad”, *Revista jurídica de Castilla y León. Número extraordinario*, enero 2004, págs. 339-369.
- FERNÁNDEZ APARICIO, J.M., *Derecho Penitenciario. Comentarios Prácticos*, Sepin Editorial Jurídica, Madrid, 2007.
- FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., NISTAL BURÓN, J., *Derecho Penitenciario*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016.
- FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., NISTAL BURÓN, J., *Manual de Derecho Penitenciario*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011.
- GALLIZO, M., “*Penas y personas. 2.810 días en las prisiones españolas*”, Editorial Debate, Barcelona, 2013.

- GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P., “Cinco cuestiones sobre la nueva suspensión-sustitución de las penas privativas de libertad”, *Diario La Ley*, Nº8688, 2016, págs. 1-10.
- GONZÁLEZ COLLANTES, T., “El trabajo penitenciario como derecho y como deber”, *Revista del Instituto Universit. de investigación en Criminología y Ciencias Penales de la UV*, Nº 11, Valencia, 2014, págs. 1-22.
- JUAN ALBALATE, J., “El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión. Entre la aceptación y el rechazo”, *Revista Internacional de Sociología*, VOL. 67, Nº 2, Mayo - Agosto, 2009, págs. 373-390.
- JUANATEY DORADO, C., *Manual de derecho penitenciario*, Iustel, Madrid, 2011.
- MANZANARES SAMANIEGO, J.L., *Suspensión, sustitución y ejecución de las penas privativas de libertad*, Editorial Comares, Granada, 2008.
- GONZÁLEZ TASCÓN, M.M., LOREDO COLUNGA, M., ROCA AGAPITO, L., VILLA SIEIRO, S.V., ALBUERNE GUTIÉRREZ, M.A, BRAVO ARTEAGA, A., “Aproximación a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad a partir de la evidencia empírica: la aplicación judicial de la pena”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, Nº 17-08, 2015, págs. 1-26.
- PRAT WESTERLINDH, C., *Alternativas a la prisión. Comentarios a las reformas introducidas por las Leyes Orgánicas 15/2003, 11/2003 y 7/2003*, Dykinson, Madrid, 2004.
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, C., *La clasificación inicial en tercer grado de tratamiento penitenciario: Desde su contexto legal a su aplicación práctica*, Universidad de Murcia, 2012.

- TAPIA BALLESTEROS, P., “Las medidas de seguridad. Reformas más recientes y últimas propuestas”, *Revista jurídica de Castilla y León*, Nº 32, enero de 2014, págs. 1-21.
- TORO, M. C., *La pena de prisión en busca de sentido. El fin de la pena privativa de libertad en los albores del siglo XXI*, Universidad de Salamanca, 2013.